



MÁS RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARA REDUCIR DESIGUALDADES: la experiencia de República Dominicana

Realización:



En alianza con:



Campaña
Latinoamericana
por el Derecho
a la Educación

Apoyo:



OXFAM

Realización: Este estudio ha sido producido en noviembre de 2019, por el Foro Socioeducativo en alianza con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Apoyo financiero: OXFAM y Danish International Development Agency.

Investigación y textos: Pável Isa Contreras.

Coordinación editorial: Laura Giannecchini.

Revisión: Nelsy Lizarazo.

Agradecimientos: Fabíola Munhoz y Carolina Osorio.

Síntesis: La versión resumen del documento que aquí se presenta ha sido actualizada y editada en noviembre del 2020 por Carlos Crespo Burgos, a pedido de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Este documento forma parte de un conjunto de estudios sobre las desigualdades educativas en América Latina, en lo que toca a tendencias, políticas y desafíos. Además de este análisis sobre el contexto de República Dominicana, integran el conjunto: un estudio regional y otros cinco estudios de caso sobre los contextos de Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala y México.

El estudio regional y los seis casos nacionales están disponibles en: www.redclade.org

Diseño Gráfico: Adesign.

Imagen de tapa: Archivo Presidencia República Dominicana.

Oficina de la CLADE

Av. Prof. Alfonso Bovero, 430, cj. 10 Perdizes
São Paulo - SP - CEP 01254-000, Brasil
Teléfono: 55 11 3853-7900

E-mail: clade@redclade.org

www.redclade.org

Abril 2021

Se permite la reproducción parcial o total de este documento, siempre y cuando no se altere el contenido del mismo y se mencione la fuente.

Las opiniones expresadas en este documento son de responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la posición de OXFAM.

MÁS RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARA REDUCIR DESIGUALDADES:

la experiencia de
República Dominicana

Realización:



En alianza con:



Campaña
Latinoamericana
por el Derecho
a la Educación

Apoyo:



OXFAM

1. BREVE ACERCAMIENTO A LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA





América Latina es la región más desigual del mundo y las inequidades educativas presentes en la región son expresión de desigualdades estructurales, tanto económicas, como las que se fueron consolidando entre la vida urbana y rural, o las que han resultado de la histórica discriminación vivida por mujeres, comunidades indígenas o las afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes u otros grupos.

En la actualidad, la gestión de las políticas públicas educativas y las intervenciones de la sociedad civil, la cooperación y otros actores en la región están cruzadas por una fuerte tensión y bifurcación. Por una parte, se reconoce una mejora en casi todos los indicadores educativos, en los últimos 20 años, que beneficiaron en buena medida a sectores sociales históricamente más postergados, y se tradujeron en una continua reducción de las desigualdades educativas. Pero, por otra, se observa una preocupante tendencia a un gradual estancamiento de la reducción de las desigualdades a lo largo de la última década, que podrían estar acercándose a un techo, cuando aún hay amplios sectores de la sociedad imposibilitados de ejercer el derecho a la educación, situación agravada por la pandemia de la COVID-19. Ello requiere la adopción de una nueva generación de políticas sociales y educativas, sustentada en un debate amplio y democrático, que aborde los aspectos más estructurales de la dinámica social de los países, y permita avanzar hacia la universalización del ejercicio del derecho humano a la educación.

Con miras a comprender mejor el escenario de las desigualdades educativas en la región y contribuir para reducirlas, en 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) UNESCO Buenos Aires y Oxfam se han juntado para elaborar el estudio regional *Desigualdades educativas en América Latina: Tendencias, Políticas y Desafíos*¹, que complementó un esfuerzo de comprensión de las desigualdades educativas globales, elaborado por Oxfam en 2019.

El estudio latinoamericano reveló que el acceso a la educación en la región, así como la permanencia y la graduación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es parte importante de un análisis sobre las desigualdades educativas. Pero también evidenció que la comprensión de las desigualdades educativas demanda estudios complementarios, por lo que se realizaron seis estudios de caso nacionales (en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana), que profundizan otras dimensiones de las desigualdades educativas, poniendo de relieve temas como la discriminación en la educación, la inequidad de género, la violencia educativa, la pertinencia de los aprendizajes, y la inversión pública en la educación.

La investigación de hecho reveló una gama heterogénea de políticas educativas que han puesto en marcha en las dos últimas décadas los Estados de la región para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.

1.1. Tendencias identificadas en la región

La alta y sostenida escolarización en el nivel primario y la ampliación en el acceso o la retención en el preescolar y la secundaria alta son los mayores logros de los sistemas educativos de la región en lo que va del siglo XXI. Ocho de cada diez niñas y niños en América Latina tienen acceso a un año en el nivel preescolar y poco más de nueve de cada diez finalizan el ciclo primario. A la par, siete de cada diez adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años se encuentran incluidos en el sistema educativo, aunque solo cinco logran concluir sus estudios en la secundaria alta.

¹ La versión completa del documento regional está disponible en www.redclade.org/publicacion.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

A pesar de estos logros, el ejercicio pleno del derecho humano a la educación se encuentra condicionado por el origen social de cada persona, el territorio, su etnia o su género. Las probabilidades de acceder a experiencias de aprendizaje enriquecedoras son mucho más altas para las familias urbanas de clase media o alta que entre quienes viven en zonas rurales, son mujeres, indígenas o afrodescendientes, personas con discapacidad – factores que dan gran complejidad al panorama educativo y presentan serios desafíos a las políticas educativas.

En el contexto regional coexisten situaciones sociales y educativas muy diversas. Países grandes y pequeños en territorio y población, pero también con un desarrollo económico y social diverso. A la vez, la región posee la riqueza de una gran diversidad cultural, en la que convergen las culturas de los pueblos originarios con las que se fueron integrando a lo largo de la historia como los afrodescendientes y personas oriundas de otras partes del mundo.

Pese a la gran diversidad de escenarios, a través de un análisis estadístico, se pudo identificar en la región situaciones educativas similares y la coexistencia de configuraciones convergentes en distintos países. Para ello, se articularon dos aspectos relevantes del panorama educativo de cada país. En primer lugar, las cifras sobre el nivel de logro en términos de acceso, permanencia y graduación en el nivel inicial, primario y secundario que muestra, entre los años 2000 y 2018, tres grupos de países con logros altos, medios y bajos. En segundo lugar, se consideraron las tendencias de cambio en el panorama educativo en el transcurso de las últimas dos décadas, diferenciando, nuevamente, países con ritmo de crecimiento alto, medio o bajo.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

Como resultado, el estudio regional llegó a 5 grupos de países. El Grupo 1 (Bolivia, Brasil y Ecuador) pasó por una fuerte transformación de sus sistemas educativos en las dos últimas décadas. El Grupo 2 (Argentina, Chile y Perú) se caracteriza por un sostenimiento histórico de una elevada cobertura y graduación del nivel inicial, primario y secundario. El Grupo 3 (Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Paraguay y México) cuenta con acentuados procesos de expansión educativa y tasas de crecimiento altas para la mayoría de sus indicadores educativos. El Grupo 4 (Panamá y Uruguay) presenta ritmos más lentos de crecimiento y una distancia entre los resultados educativos de la escuela primaria y secundaria. Finalmente, el Grupo 5 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) tiene los mayores rezagos, con vastos sectores de la población fuera de sus sistemas, a pesar de que sus indicadores educativos registran crecimientos medios y altos desde inicios de este siglo.

1.2. Políticas de Inclusión y equidad educativa

En el contexto de los límites y contradicciones de los ciclos de políticas educativas que emergieron en las últimas décadas y frente al panorama descrito, los Estados de la región han ensayado diversas políticas de inclusión y equidad con el fin de reducir las desigualdades y sostener un ritmo de mejora de los sistemas educativos. Se instaló en la mayor parte de los países el horizonte de universalización en el marco de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación para todas y todos. Ello presupone, entre otras cosas, que los Estados deben garantizar una educación universal, libre y gratuita, inclusiva, sin discriminación y ningún tipo de barreras; una

educación a lo largo de toda la vida, que forma para el pleno ejercicio de la ciudadanía y el pleno desarrollo de la personalidad humana, y cuyas prácticas se inscriben en un contexto de plena vigencia de todos los derechos humanos.

Las intervenciones en la gestión de las políticas orientadas a los sectores más postergados han girado en torno a las siguientes dimensiones: el currículum y modalidades de gestión; la infraestructura, equipamiento y tecnología; políticas de formación y apoyo a docentes; y transferencias de ingresos y bienes a las familias.

Respecto al currículum, los países de la región aún enfrentan la persistencia de contenidos que se encuentran desvinculados de la realidad cotidiana y las expectativas de niños, niñas y adolescentes. En la mitad y finales de la década del 2000, varios países (Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay) realizaron cambios curriculares hacia modelos híbridos, en los que conviven contenidos organizados por asignaturas escolares y otros modelos más contextualizados e integrados. Entre las estrategias para reducir los mecanismos de discriminación se observan fuertes cambios en relación con el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la presencia de diversas modalidades de educación para jóvenes y adultos. En tal sentido, se destaca el caso de Bolivia², que analiza el Currículo Regionalizado de la Nación Quechua, en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

Por otro lado, los países realizaron esfuerzos para afrontar y eliminar las desigualdades de género en la educación. En los diagnósticos realizados sobre la implementación de los planes de educación, se destacan los avances logrados en la reducción de las brechas entre hombres y mujeres en los diferentes niveles del sistema educativo. Sin embargo, si bien se avanzó significativamente en el acceso, se conserva una fuerte marca discriminatoria en las dinámicas educativas, en los formatos de enseñanza o en los contenidos curriculares. El estudio nacional de Guatemala³ muestra estas realidades, y el de México⁴ explora la compleja problemática de la violencia que afrontan las sociedades latinoamericanas y sus sistemas educativos.

² La versión integral del estudio de caso *El Currículo Regionalizado de la Nación Quechua: una experiencia emancipadora para erradicar desigualdades en Bolivia* está disponible en www.redclade.org/publicacion. El documento ha sido elaborado por Ingrid Vargas Vásquez, a pedido de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, bajo la coordinación de David Aruquipa, en diciembre del 2019, y actualizado y editado en noviembre del 2020 por Carlos Crespo Burgos, a pedido de CLADE.

³ La versión integral del documento *La educación y desigualdades de género en Guatemala: un estudio aproximativo* está disponible en www.redclade.org/publicacion. El documento ha sido elaborado en noviembre del 2019, por Liss Pérez, en diálogo con un grupo focal en Guatemala, a pedido del Colectivo de Educación para Todas y Todos y bajo la coordinación de Víctor Cristales. El documento ha sido actualizado y editado en noviembre del 2020 por Carlos Crespo Burgos, a pedido de CLADE.

⁴ La versión integral del caso *El derecho humano a la educación en México: las heridas desde la violencia* está disponible en: www.redclade.org/publicacion. El documento ha sido elaborado por Graciela Messina, a pedido de la Campaña por el Derecho a la Educación en México, bajo la coordinación de Jesús Juárez, en diciembre de 2019, y ha sido actualizado y editado en noviembre de 2020 por Carlos Crespo Burgos, a pedido de CLADE.

Otro problema que enfrentan los países para disminuir las brechas de desigualdad se relaciona con la insuficiencia de recursos para enseñar en la diversidad y en contextos desfavorables a la escolarización. En este aspecto se observa un conjunto de estrategias destinadas a fortalecer las competencias de las y los docentes, la elaboración de materiales educativos con énfasis en inclusión y equidad educativa, y la asistencia técnica para el diseño e implementación de estrategias para la atención de situaciones educativas relacionadas con la acumulación de desventajas sociales. Entre las estrategias más extendidas para fortalecer las competencias docentes se destaca el acompañamiento pedagógico personalizado y los programas de tutoría.

Cabe destacar que, durante la pandemia, los países orientaron sus esfuerzos en poner plataformas virtuales para continuar las clases con modalidad a distancia, aunque a menudo sin hacer los necesarios ajustes a los currículos y metodologías de enseñanza, ni brindar formación y apoyo adicional a las y los docentes, o asegurar la adecuada conectividad de las y los estudiantes o la privacidad de sus datos, lo que ha resultado en una oferta educativa muchas veces precaria y ampliado las desigualdades en el acceso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 46% de niñas y niños entre 5 y 12 años en la región no tienen conexión a internet⁵. El escenario es aún más dramático en los domicilios de más bajos ingresos de Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, donde más del 90% de ellos no tienen acceso a internet. Aunque a las plataformas virtuales se sumaron la televisión, radio y distribución de material educativo, es muy probable que se observe un aumento en la deserción escolar en los próximos años y un aumento en las desigualdades.

Además, el apoyo y la formación brindada a las y los docentes ha sido insuficiente. Esos profesionales tuvieron que adoptar bruscamente otra modalidad de enseñanza con el uso de las tecnologías. Investigaciones recientes⁶ dan cuenta del escaso reconocimiento a la sobrecarga de trabajo docente, con el agregado de ocupaciones de cuidado del hogar y de familiares mayores, en medio de los riesgos de salud y el traslado de la escuela a la casa.

Finalmente, tres casos nacionales que acompañan el informe regional abordan el límite de los impactos distributivos del gasto público en educación (caso del presente estudio de República Dominicana), los desafíos de la reciente adopción de modos de gestión privatizada en el periodo, que produjo una alta segmentación del sistema

⁵ Fuente: *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>

⁶ CETERA, Argentina (2020), Red Estrado (2020), estudio realizado en 20 países de la región.

escolar público (caso de Colombia⁷) y cómo las políticas de austeridad y contingencia impactaron la realización del derecho humano a la educación y la implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil⁸.

1.3. Desafíos para las políticas educativas

El estancamiento y retrocesos que ocurren en las brechas de desigualdad en las sociedades latinoamericanas demandan una profunda revisión del modelo de políticas vigentes en el campo educativo. Países con grandes desigualdades sociales, con una proporción importante de sus estudiantes en condición de pobreza, y sistemas educativos con gran dificultad para retener a sus estudiantes y garantizarles una experiencia educativa digna difícilmente podrán encarar una crisis con las políticas vigentes.

Se requiere avanzar hacia un modelo de análisis que mantenga visible esta heterogeneidad de escenarios, contextos y culturas. Los hallazgos de este y otros estudios muestran que los impulsos de los Estados en las dos últimas décadas se frenan ante la presencia de “nudos críticos” que obstaculizan los intentos de universalización, entre los que se destacan: las carencias y desigualdades materiales persistentes; los mecanismos de estigmatización y discriminación; los formatos escolares rígidos; la persistencia de una visión disciplinaria y meritocrática de la educación secundaria; la falta de un financiamiento adecuado.

Adquiere sentido, por lo tanto, avanzar hacia una concepción de la política educativa intersectorial, que se inscriba en el marco de un Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, lo que implica una transformación estructural de las políticas sociales, pasando de una tendencia a desarrollar políticas con escasa articulación entre diferentes áreas sociales hacia un esquema integrado y transversal, en el que todos los sectores se complementan en la función de garantizar el derecho a la educación.

⁷ La versión integral del caso *Lógicas de privatización y desigualdad en la educación colombiana: un análisis desde la perspectiva del desfinanciamiento del derecho humano a la educación* está disponible en www.redclade.org/publicacion. El documento ha sido realizado en diciembre de 2019 por Ilich Ortiz e Iván Lozada, a pedido de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y bajo la coordinación de Blanca Cecilia Gómez y María Elena Urbano, y editado por Carlos Crespo Burgos en noviembre de 2020, a pedido de CLADE.

⁸ La versión reducida en español del documento *Los efectos de la inversión en educación en Brasil: un análisis de las últimas dos décadas*, está disponible en www.redclade.org/publicacion. Realizado en octubre del 2020 por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo de la Universidad Federal Fluminense (Cede-UFF) y Centro de Defensa del Niño y del Adolescente de Ceará (Cedeca-CE), en alianza con la CLADE y Oxfam Brasil. La investigación ha sido realizada por Fábio Waltenberg, Fernando Gaiger Silveira, Marina Araújo Braz, Renam Magalhães y Roberta Mendes e Costa, bajo la coordinación de Andressa Pellanda y Daniel Cara, y chequeo de datos de Fernando Rufino. La síntesis del documento en español ha sido elaborada por Carlos Crespo Burgos, traducida por Laura Gianecchini y revisada por Nelsy Lizarazo. La versión completa del documento en portugués está disponible en www.campanha.org.br.

2. LA SITUACIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA





Una de las luchas más significativas de la sociedad dominicana frente al Estado en las últimas décadas fue la demanda por lograr un adecuado financiamiento público a la educación preuniversitaria. Inició desde finales de la década pasada y en 2012 logró que todos los candidatos a la presidencia en la campaña electoral firmaran el compromiso de cumplir con la Ley General de Educación, asignando el equivalente al 4% del PIB en el presupuesto del Estado. Como resultado, a partir de 2013 la asignación presupuestaria para la función educación se incrementó sensiblemente. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha podido impulsar un conjunto de iniciativas con un impacto relevante en la oferta de servicios de educación pública. Entre 2005 y 2017 el 74.4% de los y las estudiantes preuniversitarios estaban en el sistema público, porcentaje que se mantuvo relativamente estable a lo largo de todo el período.

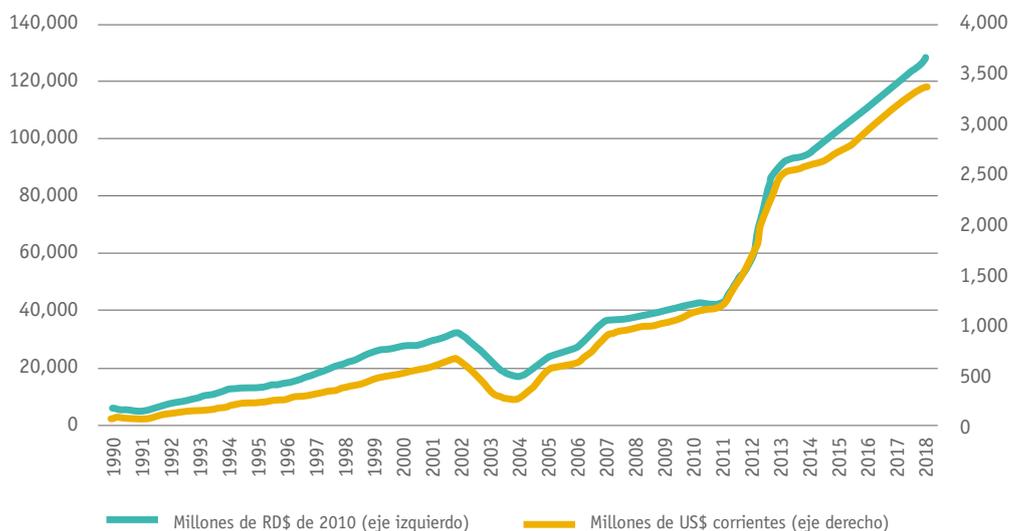
Este documento discute las implicaciones del incremento del gasto público en educación en los últimos años. En la primera sección se describen las tendencias de largo plazo del gasto público en educación y se presentan indicadores relevantes como el gasto real total y real por estudiante, y el gasto por nivel (educación inicial, básica y media). En la segunda se destacan los principales cambios observados en la educación pública a partir del incremento del financiamiento en 2013 (matrícula, infraestructura, jornada escolar extendida, servicios no educativos y salarios a maestros y maestras). La cuarta sección discute las posibles implicaciones distributivas. La quinta concluye.

2.1. TENDENCIAS DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 1990-2018

A largo plazo, el gasto público real en la función educación se ha incrementado de forma notable en República Dominicana. Medido en pesos dominicanos de 2010, entre 1990 y 2018 se multiplicó por 21, y medido en dólares corrientes lo hizo por 41. En los noventa, el gasto en educación que correspondía a menos del 1% del PIB se duplicó. Entre 2003 y 2004, se observó una sensible reducción en el contexto de la crisis macroeconómica y financiera que vivió el país, pero se retomó la senda del crecimiento a partir de 2005.

A partir de 2013 hubo un impulso decisivo como resultado del compromiso electoral asumido en 2012, con una amplia alianza de organizaciones coordinada por la Coalición Educación Digna⁹, que demandó el cumplimiento de la Ley General de Educación y un mayor financiamiento a la educación. El gobierno y el Congreso decidieron casi doblar el financiamiento a esa función. Entre 2012 y 2013 el gasto nominal creció casi 60%, el real creció en 52%, y medido en dólares corrientes en casi 50% (ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 1990-2018
MILLONES DE RD\$ DE 2010 Y MILLONES DE US\$



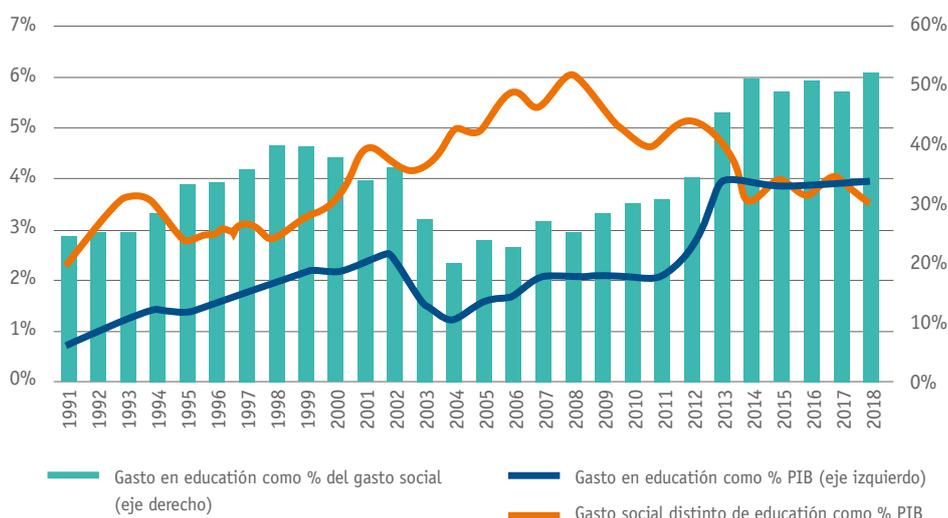
Fuente: Elaborado con base en información de DIGEPRES y Banco Central de la República Dominicana.

⁹ La Coalición Educación Digna es un movimiento social en República Dominicana, integrado por un conjunto de organizaciones y activistas, que se ha conformado el 26 de octubre de 2010, con el propósito de exigir el cumplimiento del mandato legal para asignar el 4% del PIB a inversión en educación preuniversitaria. <https://www.facebook.com/coalicioneducaciondigna/>

Desde entonces continuó incrementándose hasta 2018. El gasto nominal se expandió a una tasa media anual de 9.9% y el gasto real a una de 7.3%. En 2018 el gasto medido en dólares fue de US\$ 3,361 millones, el doble que en 2012.

El presupuesto pasó desde 0.8% del PIB en 1991 hasta 2.2% del PIB en 1999, como se observa en el Gráfico 2. Hay que notar que el gasto social total no creció, el incremento en el financiamiento público a la educación se hizo a costa de otros sectores sociales y la participación de la educación en el gasto social total pasó desde 24.7% hasta 39.7%.

GRÁFICO 2. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y SOCIAL DISTINTO DE EDUCACIÓN 1990-2018 COMO % DEL PIB Y DEL GASTO SOCIAL



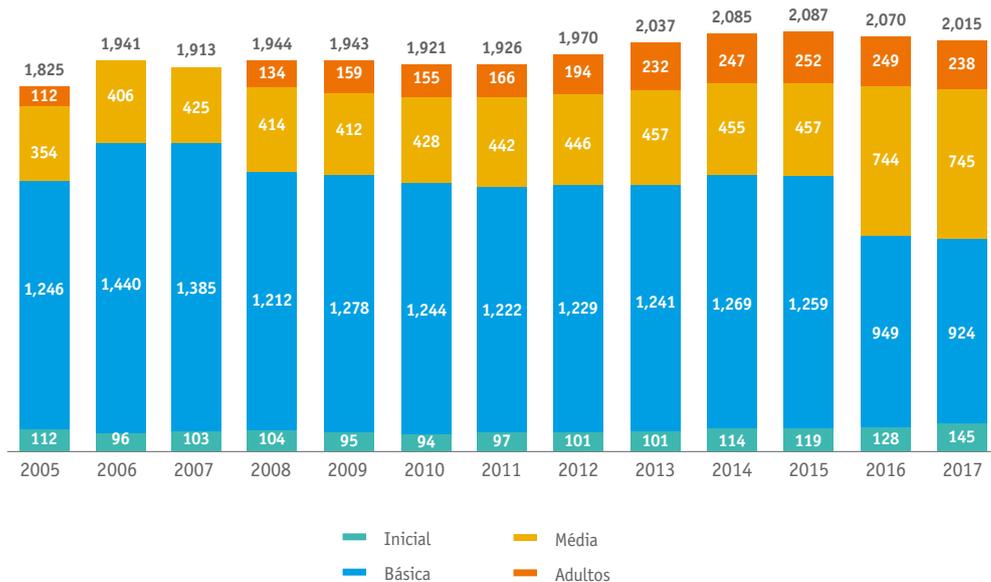
Fuente: Elaborado con base en información de DIGEPRES y Banco Central de la República Dominicana.

La crisis macroeconómica de 2003-2004 hizo que el gasto en educación retrocediera hasta el equivalente al 1.3% del PIB; el gasto social como porcentaje del PIB creció en respuesta a la crisis, e hizo retroceder la participación de la educación hasta 20.3% del gasto social. A partir de 2005 se observó una recuperación hasta 2007, cuando alcanzó cerca de 2% del PIB, valor que se mantuvo estable hasta 2011 y llegó a representar el 30.8% del gasto social en 2011.

A partir de 2013 se observó tanto un incremento muy intenso del gasto en educación, que lo llevó hasta el equivalente a 4% del PIB como un incremento significativo en la participación en el gasto social total hasta alcanzar poco más de 50%. Como contrapartida, el gasto en otras funciones sociales declinó desde 5.2% del PIB en 2012 hasta 3.6% en 2018.

Aunque el gasto real creció de forma intensa, datos del MINERD indican que la matrícula en las escuelas del sistema público creció de forma relativamente lenta. Entre 2005 (primer año con el que se cuenta con estadísticas publicadas) y 2018, la matrícula escolar creció en 12.4%, lo que supone una media anual de crecimiento de 1.0%. El número total de estudiantes pasó desde 1.825 millones hasta 2.015 millones. Mientras el número de estudiantes en el nivel básico se mantiene relativamente estable, se observa un crecimiento moderado en el nivel medio, en educación inicial y en educación de adultos. En el caso de la educación de adultos, se observa un salto de casi 40 mil estudiantes en 2013 como se ve en el Gráfico 3.

GRÁFICO 3. NÚMERO ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS POR NIVEL 2005-2017
MILLONES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS AL INICIO DE CADA AÑO ESCOLAR



Fuente: Ministerio de Educación. Anuario de Estadísticas Educativas. Varios años.

*En esos años, el número de estudiantes en educación de adultos no fue publicado por separado, sino junto al número total de estudiantes en básica y media.

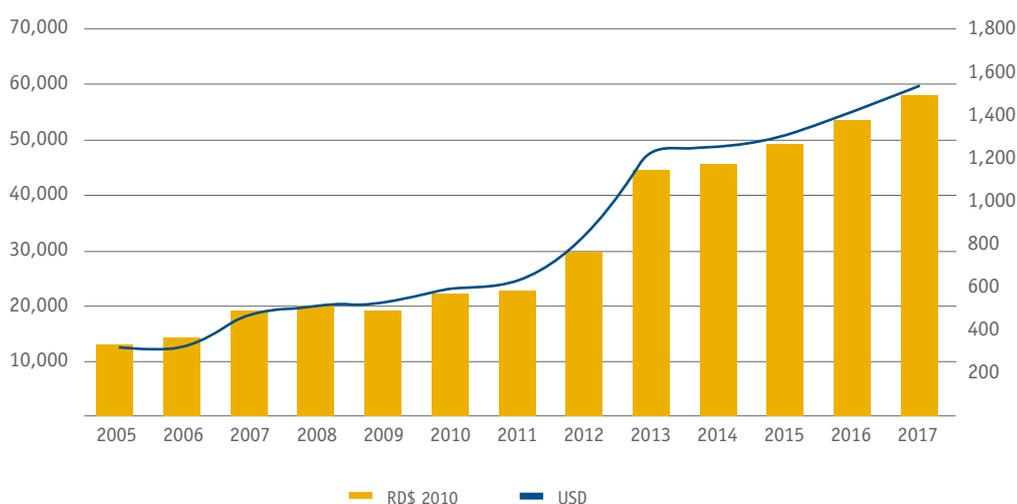
** A partir de 2013, el MINERD modificó la estructura académica y se inició un proceso gradual y progresivo de reorganización de los niveles y los ciclos y la duración de estos. Para la educación media implicó la expansión de dos años, uno para cada ciclo, y pasó a llamarse secundaria, y para la educación básica, la reducción de un ciclo o dos años y pasa a llamarse educación primaria.

El lento crecimiento del número de estudiantes en el sistema público se explica por varios factores:

1. demográfico: la inversión de la pirámide poblacional con un decrecimiento de la población infantil y adolescente;
2. el crecimiento de la educación privada que en el 2017 representó el 25% de la matrícula total;
3. la incapacidad del sistema público para retener estudiantes: mientras la tasa neta de matriculación en educación pública ha permanecido invariable o con ligeros aumentos en el nivel medio, las tasas de abandono han persistido y son particularmente elevadas en el nivel medio.

Como resultado del reducido ritmo de crecimiento del número de estudiantes y de la intensa expansión del gasto real total en educación, a partir de 2013, el gasto real por estudiante creció vigorosamente. El Gráfico 4 muestra que el gasto real pasó desde 30.1 mil pesos por estudiante en 2012 (838.6 dólares) hasta 44.3 mil pesos en 2013 (1,216.6 dólares) y hasta 58.1 mil en 2018 (1,528.8 dólares).

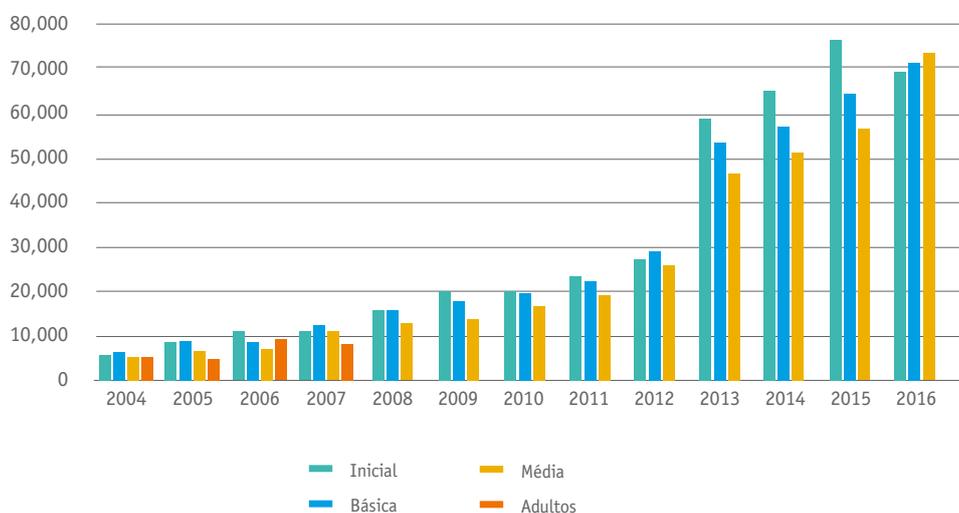
GRÁFICO 4. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ESTUDIANTE 2005-2017
RD\$ DE 2010 Y US\$



Fuente: Elaborado con base en información de DIGEPRES, Banco Central y Ministerio de Educación de la República Dominicana.

El gasto por estudiante por nivel también creció de forma significativa, según lo muestra el Gráfico 5 a partir de 2013¹⁰. Se advierte que, desde 2013 hasta 2015, el gasto por estudiante en educación inicial superó al gasto por estudiante en el resto de los niveles, lo cual es cónsono con el esfuerzo que se realizó para fortalecer la oferta educativa para la primera infancia.

**GRÁFICO 5. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ESTUDIANTE POR CICLO 2004-2017
PESOS DOMINICANOS (RD\$)**



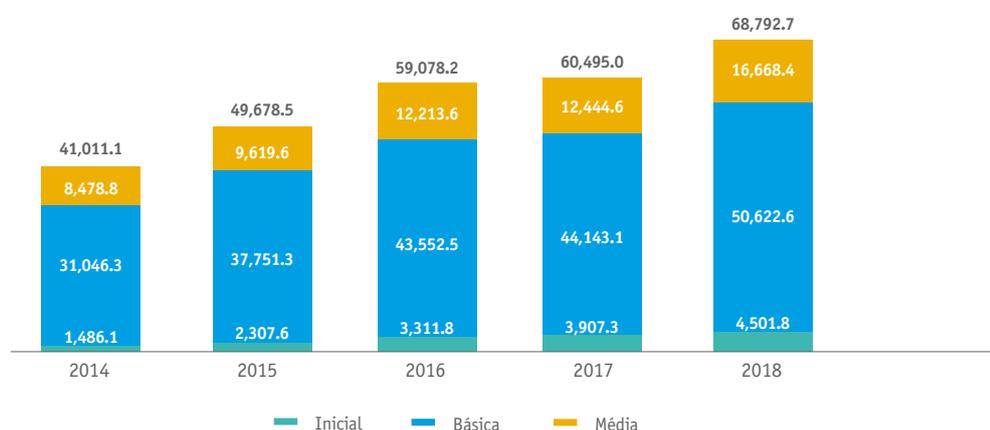
Fuente: SISDOM 2017

Nota: A partir de 2007, los gastos por estudiante de la educación de adultos no estuvieron disponibles.

El Gráfico 6 muestra el gasto real total por estudiante y por nivel, considerando sólo los gastos imputables a cada uno de ellos. Los datos de la ejecución presupuestaria por nivel están disponibles sólo a partir de 2014 y muestran que entre ese año y 2018 los gastos totales reales por estudiantes crecieron en un 68% al pasar desde 41,011 pesos hasta 68,793 pesos: un incremento absoluto de 27,792 pesos. De ese aumento, 19,576 pesos (70.4%) fueron explicados por el incremento del financiamiento para educación básica, 5,210 pesos (18.7%) para educación media y el resto para educación inicial.

¹⁰ Estos datos se construyeron combinando el gasto directamente imputable a cada nivel educativo (inicial, básica, media, adultos) con una distribución proporcional al porcentaje de estudiantes en cada nivel de los gastos no directamente imputables a alguno de ellos.

**GRÁFICO 6. GASTO PÚBLICO REAL POR ESTUDIANTE POR CICLO 2014-2018
PESOS DOMINICANOS DE 2010**



Fuente: Elaborado con base en datos de DIGEPRES y Ministerio de Educación.

2.2. DESPUÉS DEL 4%: IMPLICACIONES DEL AUMENTO DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

El impacto del incremento en el financiamiento público a la educación preuniversitaria puede ser evaluado atendiendo a, por lo menos, cinco criterios: a) matrícula escolar; b) infraestructura y el personal docente disponible; c) alfabetismo; d) servicios no educativos provistos a través del sistema escolar, y e) calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje¹¹.

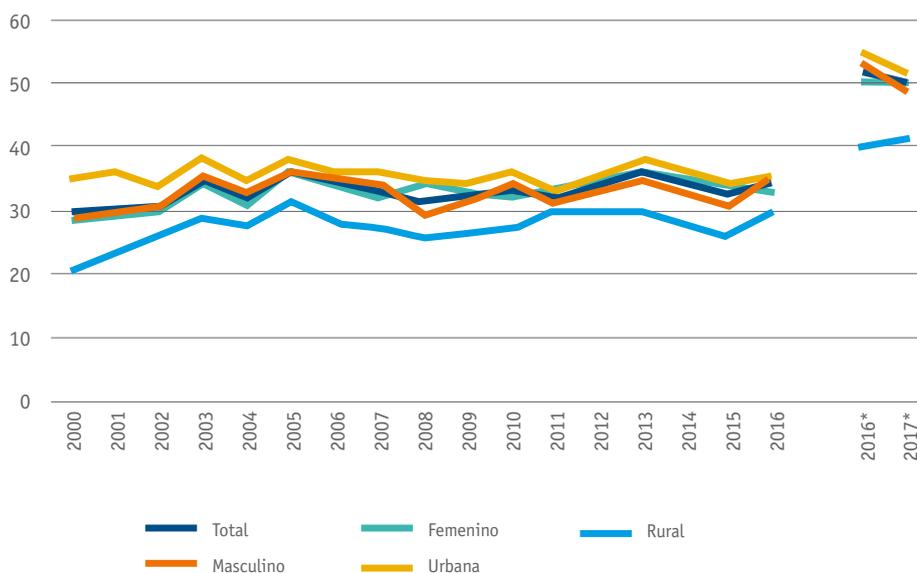
Estos criterios responden a dos cosas. Primero, al hecho de que avanzar en algunas de esas agendas como matrícula escolar, alfabetismo y calidad de los aprendizajes es un objetivo obvio de cualquier sistema escolar. Segundo, a que varias de las agendas han sido iniciativas fundamentales impulsadas por el gobierno y el Ministerio de Educación, tales como el Programa de Edificaciones Escolares, Quisqueya Aprende Contigo (que busca la alfabetización de personas adultas y es ejecutado por la Presidencia de la República), la Jornada Escolar Extendida (que amplió en una muy elevada proporción de escuelas la jornada escolar y fortaleció la provisión de servicios no educativos como los de alimentación, salud e inclusión), y las iniciativas para mejorar las prácticas de enseñanza, como la Estrategia de Formación Docente Continua Basada en la Escuela (EFFCE). A continuación, la evidencia disponible en cada uno de estos aspectos.

¹¹ Estos criterios fueron definidos atendiendo a aspectos imprescindibles en cualquier sistema escolar; y a prioridades establecidas por el gobierno y el Ministerio de Educación.

2.2.1. MATRÍCULA ESCOLAR¹²

La evidencia disponible sugiere que el incremento en el gasto público en educación no ha impactado de manera significativa en la matriculación neta. En el caso de la educación inicial las tasas medias se han mantenido ligeramente por encima de 30%, y después de 2013 cuando el gasto subió drásticamente, no se advierten cambios significativos. Pese a que el fortalecimiento de la oferta de servicios para la primera infancia (incluyendo educativos para niños y niñas de 3 a 5 años) ha sido una prioridad de la política social del gobierno, el Gráfico 7 muestra que las bajas tasas de matriculación se han mantenido y son aún más bajas en las zonas rurales.

GRÁFICO 7. TASAS NETAS DE MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL
POR AÑO 2000-2017 – POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA



Fuente: SISDOM 2016, en base a datos de la ENFT.

* Elaborado por SISDOM en base a datos de la ENCFT

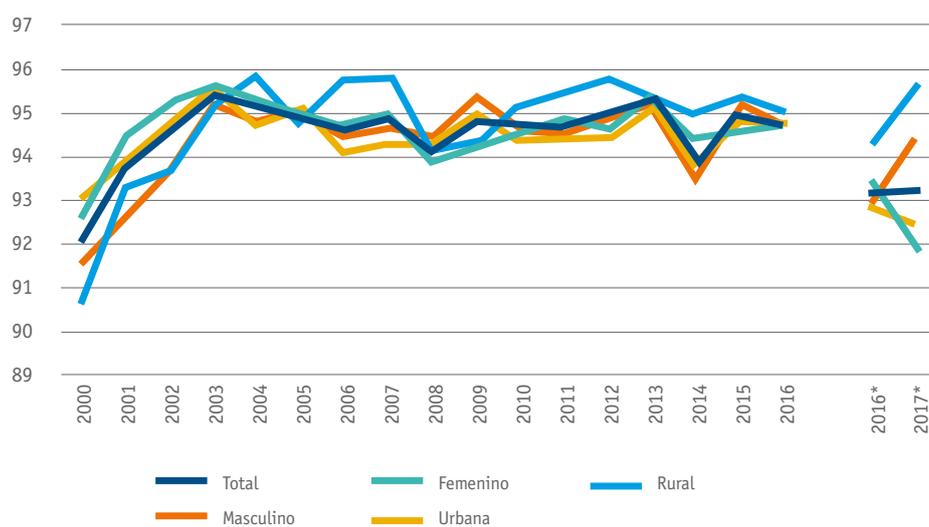
Tampoco en la educación básica (de primero a sexto grado, niños y niñas de 6 a 13 años) se observan incrementos en las tasas de matriculación neta (ver Gráfico 8). Después del crecimiento observado a inicios de la década pasada, cuando pasó desde 92% en 2000 hasta más de 95% en 2003, la tasa se ha mantenido relativamente estable y fluctuando entre 94% y 95%.

¹² La tasa neta de matriculación es la proporción de niñas, niños y adolescentes que, en cada ciclo escolar, le corresponde por su edad, y están matriculados en ese nivel.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

**GRÁFICO 8. TASA NETA DE MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA POR AÑO
2000-2017 – POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA**



Fuente: SISDOM 2017, elaborado con datos de la ENFT.

* Estimada en base a la nueva ENCFT.

La matriculación neta en el nivel medio (primero a sexto, adolescentes entre 13 y 17 años) muestra aumentos sostenidos desde inicios de la década pasada hasta inicios de ésta, pero no se advierten cambios significativos debido al incremento de financiamiento. De hecho, las tasas han permanecido estables desde 2011 con muy ligeras variaciones por sexo y lugar de residencia.

2.2.2. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL DOCENTE

El incremento financiero a partir de 2013 permitió impulsar el Programa de Edificaciones Escolares, una ambiciosa iniciativa que buscaba reducir el agudo déficit de infraestructura escolar. Entre 2013 y 2018, el MINERD construyó o habilitó un total de 18,902 espacios escolares, en 1,117 centros educativos. De esos, 14,154 fueron nuevas aulas, 2,907 fueron aulas rehabilitadas y el resto fue la construcción de laboratorios, bibliotecas y talleres (ver Tabla 1). La mayor parte del esfuerzo se desarrolló entre 2013 y 2016.

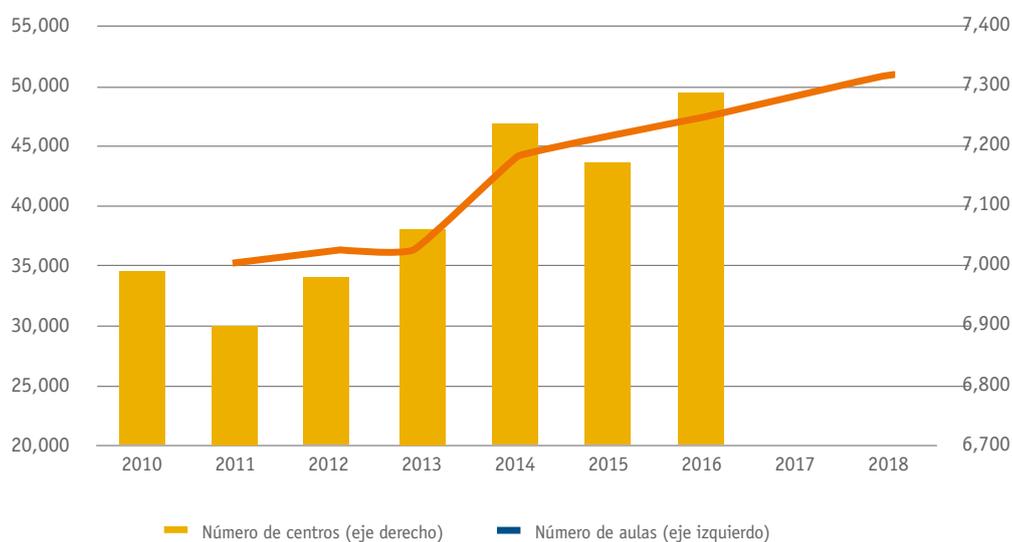
TABLA 1. AULAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN EL PERÍODO 2013-2018

	2013-2016*	2016-2018*	2013-2018
Aulas nuevas	10,473	3,681	14,154
Aulas rehabilitadas	2,710	197	2,907
Laboratorios de ciencias	263	81	344
Laboratorios de informática	392	124	516
Bibliotecas	713	211	924
Talleres	40	17	57
Total de espacios escolares	14,591	4,311	18,902

Fuente: IDEC (2019).

Entre 2011 y 2017, el número total de escuelas creció en 295 (4.2%), pasando desde 6,994 hasta 7,289, y entre 2011 y 2018 el número de aulas creció en 15,647 (44.5%), pasando desde 35,161 hasta 50,808 (ver Gráfico 10). Esto contribuyó a reducir el exceso de uso de la infraestructura escolar, a mejorar su calidad y a facilitar la implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE).

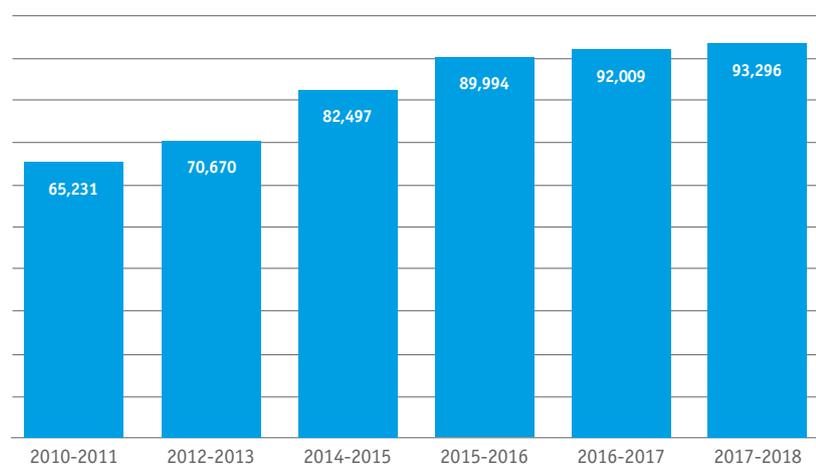
GRÁFICO 10. CENTROS ESCOLARES Y AULAS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN, 2010-2018 – NÚMERO DE CENTROS Y DE AULAS



Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana

De igual manera, entre los años escolares 2010-2011 y 2017-2018, fueron contratados más de 28 mil nuevos docentes. El número total se multiplicó por 1.43, pasando desde 65,231 docentes hasta 93,296 (ver Gráfico 11).

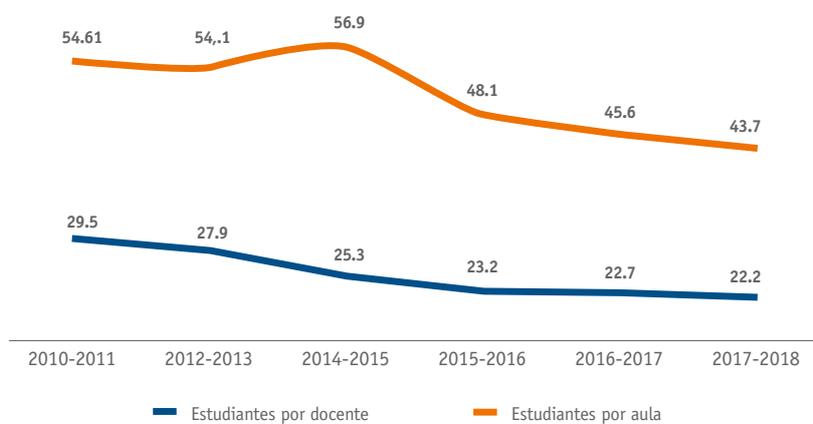
GRÁFICO 11. PERSONAL DOCENTE EN EL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN 2010-2017 NÚMERO TOTAL DE DOCENTES



Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana.

Además, se redujo el número de estudiantes por aula desde 54.6 en 2010-2011 hasta 43.7 en 2017-2018. El resultado, como se observa en el Gráfico 12, fue una reducción del cociente estudiantes por docente, el cual bajó desde 29.5 en el año escolar 2010-2011 hasta 22.2 en 2017-2018.

GRÁFICO 12. COCIENTES ESTUDIANTES POR DOCENTE Y ESTUDIANTES POR AULA 2010-2017



Fuente: Elaborado con base en información del MINERD.

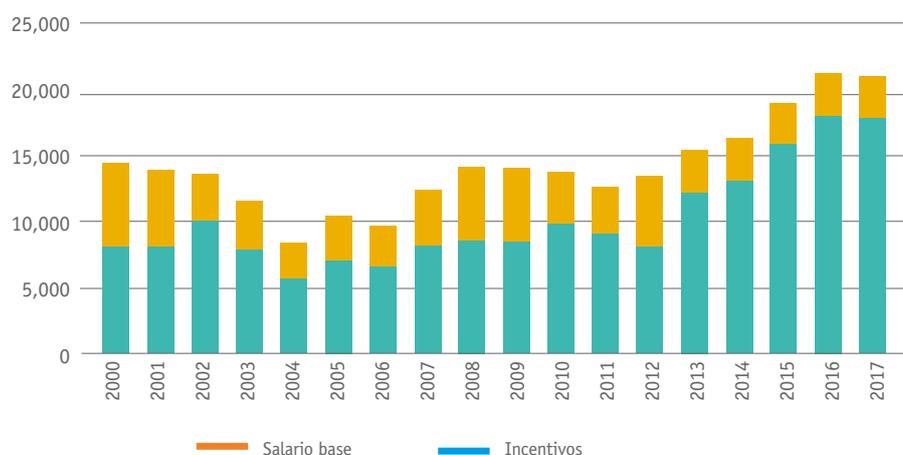
Foto: Archivo Presidencia República Dominicana



Por último, es necesario hacer referencia al fuerte incremento en las remuneraciones al personal docente. Los muy bajos salarios de maestros y maestras fueron considerados entre las principales barreras que impedían mejorar los procesos de enseñanza. La insatisfacción laboral era causa de continuos reclamos del personal docente en procura de incrementos salariales. De allí que, con mayores recursos disponibles, el gobierno decidió negociar aumentos salariales con el gremio magisterial.

El Gráfico 13 presenta la evolución del salario real inicial, en pesos de 2010, para personal docente del sector público en el nivel básico, incluyendo el salario base y las remuneraciones totales por incentivos. Se observa el sensible incremento a partir de 2013. El salario real de 2017 para este personal docente fue un 56% más elevado que en 2013.

GRÁFICO 13. SALARIO REAL TOTAL INICIAL PARA PERSONAL DOCENTE EN EL NIVEL BÁSICO 2000-2017 –PESOS DE 2010



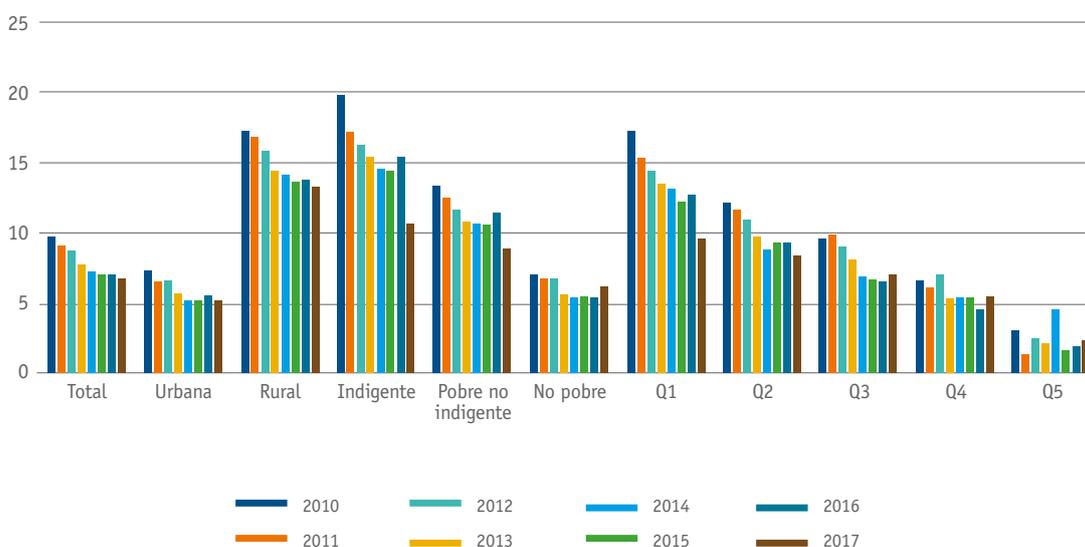
Fuente: Elaborado con base en información del SISDOM 2017 y del Banco Central de la República Dominicana.

2.2.3. ANALFABETISMO

La erradicación del analfabetismo fue otra de las metas del gobierno que inició en 2012. Aunque el aumento de financiamiento para la educación preuniversitaria se dirigió al MINERD para educación inicial, básica y media, y no para erradicar el analfabetismo en adultos, proveyó un contexto propicio para lograr esa meta que supuso una inversión de recursos públicos por parte del Ministerio de la Presidencia, institución a cargo del programa de alfabetización.

Como resultado, el analfabetismo en la población de 15 años y más se redujo desde 9.8% en 2010 hasta 6.8% en 2017. La reducción se observó tanto en las zonas urbanas como en las rurales, en todos los quintiles de ingreso (excepto en el quinto) y en los hogares indigentes, pobres no indigentes y no pobres (Ver Gráfico 14).

GRÁFICO 14. TASA DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE POBLACIÓN SELECCIONADOS 2010-2017 – % DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS



Fuente: SISDOM 2017.

Es importante destacar que las reducciones porcentuales más intensas en las tasas de analfabetismo se observaron entre la población indigente y pobre y en los dos quintiles de ingresos más bajos. Esto supone un impacto distributivo progresivo de la intervención pública en este ámbito.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

2.2.4. SERVICIOS NO EDUCATIVOS

La Jornada Escolar Extendida (JEE) consiste en incrementar gradualmente hasta generalizar la jornada de 8 horas para fortalecer la formación integral de los y las estudiantes y fortalecer a la escuela como espacio de protección social de niños, niñas y adolescentes. Fue asumida como política de Estado en 2014 y ha demandado una fuerte asignación de recursos para nuevos servicios para actividades educativas, deportivas, culturales, alimentación, entre las más importantes.

A partir de 2014 recibió un impulso decidido; en el año escolar 2018-2019 ese porcentaje se había incrementado hasta 69% (1.27 millones de estudiantes) con 4,545 centros educativos involucrados, lo que representa más de la mitad del total nacional. El esfuerzo económico ha sido inmenso y ha representado un significativo fortalecimiento del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), instancia del Ministerio de Educación (MINERD) a cargo de los programas que dan sustento a la JEE, en particular el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los programas de salud escolar.

A esto se suman las intervenciones para la provisión de utilería y uniformes escolares y aquellas dirigidas a mejorar la inclusión escolar de personas con discapacidad.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

2.2.5. CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Es importante subrayar que la evidencia disponible no permite comparar los resultados en los aprendizajes antes y después del incremento en el gasto público en educación porque no existen evaluaciones sistemáticas y completas a lo largo del tiempo. Por otra parte, se requiere la construcción de indicadores que permitan evaluar de modo más comprensivo el conjunto de los procesos formativos que ocurren en los espacios escolares para conocer con exactitud el impacto del incremento presupuestario.

Sin embargo, con los datos disponibles referidos a medición del logro académico en lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales se puede observar que todavía hay grandes desafíos en términos de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudios disponibles del IDEC (2019) de logro de aprendizaje en tercer en 2017 y sexto grado en 2018 siguen mostrando la necesidad que tiene el país de mantener la prioridad de la educación para revertir los resultados, un logro que demanda períodos largos, con inversión sostenida en el tiempo.

A continuación, algunos datos ilustrativos: en el tercer grado de primaria, en lengua española, solo el 12% de los y las estudiantes alcanzó un resultado satisfactorio; el 50% apenas alcanzó un nivel elemental. En tercer grado de primaria, en matemáticas, sólo el 27% alcanzó un grado satisfactorio y el 44% logró un nivel elemental. En el sexto grado de primaria, el 27% obtuvo resultados satisfactorios en lengua española;

un 53% logró resultados aceptables; y un 20% alcanzó logros apenas elementales. En el sexto grado de primaria, en matemáticas, solo el 4% logró una calificación satisfactoria y el 64% obtuvo un rendimiento elemental; en ese mismo grado, en ciencias sociales, un resultado satisfactorio sólo fue alcanzado por el 16% de los estudiantes evaluados, y en ciencias de la naturaleza, sólo lo logró un 18%. Los resultados de estudiantes en la JEE fueron un poco más altos que en el resto.

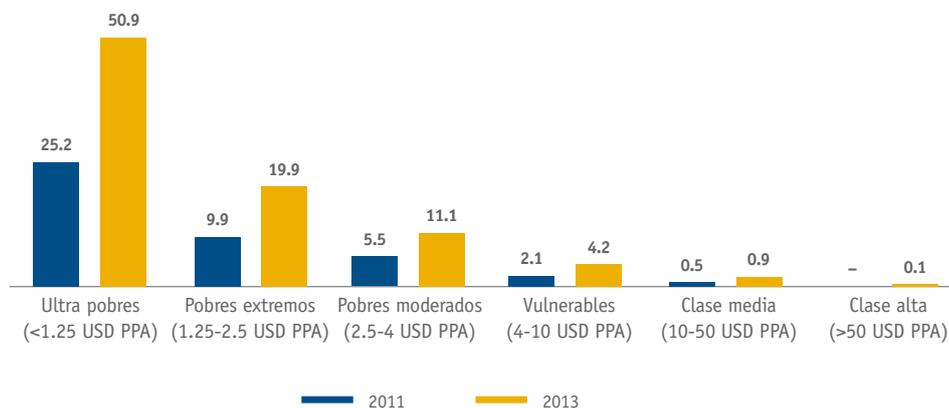
Por su parte, el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de 2006 y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de 2013, realizado por la UNESCO a estudiantes de tercero y sexto grado en 16 países de la región, si bien muestran los enormes retos de República Dominicana, que aparece entre los países de menor desempeño en las áreas evaluadas (matemáticas, lectura y escritura y ciencias de la naturaleza), también sugieren que entre 2006 y 2013 ocurrieron mejoras, dato apoyado por los resultados de las pruebas nacionales, que mostraron un incremento moderado en el porcentaje de estudiantes que aprobó el examen en la primera convocatoria.

En síntesis, el incremento en el gasto en educación ha logrado expandir sensiblemente la infraestructura escolar, aumentar el personal docente y mejorar los salarios, y fortalecer de forma notable los servicios no educativos en el marco de la expansión de la Jornada Escolar Extendida (JEE). No obstante, se mantienen retos fundamentales en relación a la matrícula escolar (más aún después del impacto enorme que ha tenido la pandemia a causa del COVID-19), la retención y terminación de los estudios y la mejora en los aprendizajes.

2.3. LOS IMPACTOS DISTRIBUTIVOS DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

Es ampliamente asumido que un mayor gasto público en educación es progresivo en la medida en que la demanda de educación pública se concentra en los hogares de los estratos socioeconómicos bajos. De hecho, hay evidencia robusta de ello. En el contexto de la iniciativa Commitment to Equity (CEQ), Aristy-Escuder, Cabrera, Moreno-Dodson y Sánchez-Martín (2016) evaluaron las implicaciones distributivas de la política fiscal en la República Dominicana. En el caso de la educación, encontraron un impacto muy progresivo del gasto público. En una medición con datos de gasto de 2013, el año en que precisamente se incrementó la asignación presupuestaria para la educación preuniversitaria, el estudio estimó que al monetizar el valor de las transferencias en especie (bienes y servicios), el 40% más pobre de la población recibió el 52% del gasto público en educación con una importante distribución hacia los sectores más pobres (Ver Gráfico 17).

GRÁFICO 17. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR GRUPOS SOCIOECONÓMICOS EN 2011 Y 2013
% DEL INCREMENTO TOTAL DEL INGRESO DE MERCADO



Fuente: Aristy-Escuder, Cabrera, Moreno-Dodson y Sánchez-Martín (2016).

Nota: los datos para 2011 se derivan de un análisis contrafactual en el que se reestimó el efecto total del gasto público en educación a partir de la distribución por estrato para 2013.

Más aún, el CEQ (2016) encontró que el gasto público en educación es progresivo para todos los niveles de educación, excepto para el segundo ciclo de secundaria y para el universitario. Los más progresivos son el gasto en educación inicial y primaria, para los que la curva de concentración se ubicó por encima de la curva de la población, seguido del primer nivel de educación media (tres primeros grados).

En contraste, el gasto en los últimos tres grados del nivel medio y en el nivel universitario son regresivos, un aspecto importante a considerar para la política pública. La reducción en la progresividad del gasto en educación a medida en que avanza el nivel está presumiblemente asociada a dos factores. Primero, la deserción escolar, especialmente en educación media, la cual es mayor entre adolescentes de hogares pobres y en pobreza extrema. Segundo, a que, en el nivel universitario, las personas optan por la educación no pública debido a preocupaciones relacionadas con la calidad.

Estudios como los realizados por Aristy-Escuder, et al (2016) en relación a la participación de los hogares por estrato económico en la educación pública muestran la importancia de continuar indagando temas como: si la situación de matriculación por estrato socioeconómico o situación de pobreza ha cambiado después del sustancial incremento en el financiamiento público; si la progresividad del gasto en educación se ha modificado; y sobre cuáles son los factores que inciden positivamente en la universalización de la matrícula a partir del incremento del gasto público, entre otros temas que requieren ser estudiados para proveer insumos a la política pública.



Foto: Archivo Presidencia República Dominicana

2.4. CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio constata el intenso crecimiento que experimentó el gasto público en educación de República Dominicana a partir de 2013, el cual implicó un incremento del gasto como proporción del PIB, del gasto público total, del gasto público social y del gasto real por estudiante, que casi se duplicó en seis años.

El aumento del financiamiento público se tradujo en una expansión notable de la infraestructura escolar, del total del personal docente contratado, de los salarios de ese personal y de los servicios educativos y no educativos como salud, así como en la expansión de la Jornada Escolar Extendida.

La evidencia indica que el gasto público en educación es altamente progresivo y que el incremento en el financiamiento a partir de 2013 duplicó las transferencias a los estratos ultra pobres, pobres extremos, pobres moderados y población vulnerable, disminuyendo desigualdades.

No obstante, de este importante progreso, el país mantiene el gran desafío de avanzar en el cierre de brechas de matrícula y asistencia que persisten, en especial, en los niveles inicial y medio. Asimismo, un reto de la política pública es fortalecer la inversión en las áreas clave para la mejora integral de los aprendizajes, incluyendo

los logros en las áreas cognitivas básicas (matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales), que se miden prioritariamente en los sistemas nacionales y en las evaluaciones internacionales. Lograr esos objetivos requiere acciones que contribuyan a vencer las barreras que enfrenta la demanda.

2.5. RECOMENDACIONES PARA LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Por el lado de la oferta, se requiere expandir considerablemente la oferta de educación inicial y secundaria para lo que hay que continuar incrementando la infraestructura escolar, así como el personal docente en ambos niveles. La educación es un derecho humano desde el nacimiento y una obligación de los Estados. Asimismo, hay evidencia de que la ausencia de educación inicial dificulta los resultados de la enseñanza en los niveles superiores e incrementa las probabilidades de exclusión escolar. Así, considerando que una de las barreras del acceso a la educación es la falta de demanda por desconocimiento de las ventajas de la educación temprana, igualmente es necesario promover la demanda de educación inicial.

Por otra parte, es urgente fortalecer las acciones para lograr que el sistema educativo retenga a los y las adolescentes en el nivel medio (educación secundaria), dirigiendo la asistencia social para que incentive la asistencia escolar hasta el último grado. Y realizar esfuerzos continuos e intensos por incrementar la demanda de educación de poblaciones vulnerables, especialmente aquellas en condiciones de pobreza extrema y de hogares con situaciones complejas que comprometen a la población infantil y adolescente, como el embarazo en adolescentes, el alto número de dependientes (niños, niñas y envejecientes) y de personas con discapacidad. Esto supone articular esfuerzos con instituciones de protección social, cuyos servicios facilitarían esa demanda.

De hecho, es importante realizar un esfuerzo de reflexión, diálogo y acuerdo para identificar los factores claves para la universalización de la educación en todos los niveles y para el aseguramiento del aprendizaje de las y los estudiantes, tanto desde el sector educativo como desde otros sectores que juegan en favor del acceso y del aprendizaje. Los propios datos de la UNESCO (2006, 2013) aportan pruebas contundentes de que los factores extraescolares como la situación socioeconómica de las familias y su nivel educativo son dos de los más importantes en los resultados de logro, por tanto, resulta fundamental:

- Acompañar el gran avance del país en términos de aumento del financiamiento a la educación con políticas y estrategias intersectoriales para apoyo a las familias en condiciones de vulnerabilidad.

- Desarrollar e implementar estrategias de comunicación ciudadana, en línea con lo antes mencionado, para estimular el compromiso de las familias con el acceso de hijos e hijas al sistema educativo, en particular en los niveles inicial y medio;
- Crear programas de fortalecimiento de la relación escuelas y comunidades y de soporte a las familias para mejorar el acompañamiento educativo a sus hijos e hijas, entre otras intervenciones de política.

De la misma forma, los estudios destacan el peso que tienen el clima escolar y del aula, el sentido de los aprendizajes para los estudiantes y las familias, la formación inicial y en servicio de las y los docentes, factores que orientan decisiones de política que muestran el valor de actuar para el fortalecimiento y desarrollo de la profesión docente; la construcción de culturas escolares democráticas e inclusivas; el desarrollo de sistemas de gestión que apoyen la autonomía escolar, y el trabajo colaborativo entre docentes para tomar las mejores decisiones a partir de la diversidad de los contextos.

También se necesita impulsar de forma más intensa y decidida los esfuerzos por mejorar las prácticas de enseñanza. Además de la contribución que eso puede hacer a los procesos de aprendizaje y eventualmente al incremento en las habilidades laborales, tiene un potencial significativo para fortalecer la retención escolar y reducir la exclusión, al reducir la repitencia, la sobreedad y el abandono escolar.

Todo lo anterior indica que cerrar las persistentes brechas de calidad y de cobertura deberá ser la prioridad de las políticas de educación. La buena noticia es que mejorar la calidad de los aprendizajes debe contribuir a reducir la exclusión escolar porque ataca algunas de sus causas como la sobreedad y la repitencia. Ambos objetivos contribuirían a lograr que los efectos de la progresividad del gasto se profundicen, contribuyendo a fortalecer la realización del derecho a la educación y la dignidad de toda la población.

Por último, es relevante reconocer que a medida que se incrementan la cobertura del sistema público y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aumenta el riesgo de que el nivel de progresividad del gasto en educación pública se reduzca. Pero, al contrario, la evidencia apunta que un financiamiento adecuado de la educación reduce desigualdades y podrían reducir los desincentivos que los estratos de riqueza más elevados tienen para optar por la educación pública, en particular las percepciones de baja calidad de la enseñanza. Con ello, en ausencia de barreras legales o administrativas, crecería el acceso de estos al sistema público, a los beneficios que se percibirían del gasto público.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aristy-Escuder, J., Cabrera, M., Moreno-Dodson, B. y Sánchez-Martín, M. (2016): “Fiscal Policy and Redistribution in the Dominican Republic”. CEQ Institute. Tulane University. Working Paper 47. June.

Banco Central de la República Dominicana. Estadísticas. <https://www.bancentral.gov.do/>

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Ministerio de Hacienda, República Dominicana Estadísticas de gasto público del Gobierno Central. <https://www.digepres.gob.do/estadisticas/gastos/>

IDEC (2019): “Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2018”. Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Santo Domingo.

Ministerio de Educación. Anuario de Estadísticas Educativas. Varios años. <http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/areas-institucionales/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/boletines-estadisticos>

Ministerio de Educación. Anuario de Indicadores Educativos. Varios años. <http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/areas-institucionales/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/indicadores>

Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) 2016 y 2017. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Santo Domingo.

Conozca más sobre la acción
de la CLADE en www.redclade.org

Contáctenos:

Av. Prof. Alfonso Bovero, 430
conj. 10 - Perdizes, São Paulo
01254-000, Brasil
+55 11 3853-7900
clade@redclade.org



Campaña
Latinoamericana
**por el Derecho
a la Educación**